

Dificultades en el incremento a las pensiones mínimas

Los principios de la equidad, la solidaridad, el respeto a la condición más beneficiosa y el derecho al disfrute del patrimonio, como la vivienda digna, han quedado reducidos a simples expresiones de la Carta Política, sin fuerza ni aplicación alguna en el caso de los esposos o compañeros permanentes de los pensionados de salario mínimo por cuenta de Colpensiones que aspiren a que se les aporte un 14 % adicional de la pensión, según lo previsto por el Decreto 758 de 1990, el Acuerdo 049 del Seguro Social y la Resolución 104356 del 2010.

La norma y el acuerdo reglamentario aludidos establecieron la prerrogativa del incremento, bajo dos requisitos: la convivencia en un mismo techo y que la esposa o compañera del jubilado no reciba, a su vez, pensión ni ingreso laboral alguno. A la dificultad de las personas de la tercera edad frente a Colpensiones para obtener el reconocimiento de la pensión, se suman las reiteradas campañas de la entidad para que sus filiados no acudan a abogados que defiendan su interés económico y la negativa a darle aplicación

al incremento establecido en la ley para las parejas fieles que no tienen una segunda pensión y que carecen de rentas de trabajo para cubrir los crecientes gastos de sostenimiento familiar.

Con la Sentencia T-058 del 2018 de la Corte Constitucional, esas dificultades se han acrecentado para la vulnerable ancianidad colombiana, toda vez que si la pareja posee vivienda propia, y esta se da en arriendo,

“Estamos frente a una nueva valoración jurídica perjudicial para la ancianidad del país...”

precisamente para solventar los gastos que un solo ingreso familiar no alcanza a cubrir, se convierte en impedimento para obtener el incremento de la pensión por cónyuge, al considerar que el producto de esa renta impide al jubilado tener derecho de incremento, pues, según su interpretación, se trata de un ingreso asimilable a sueldo, pensión, renta, etc.

Cabe preguntarse si el derecho a reclamar beneficio patrimonial derivado de la posesión de un inmueble ha desaparecido de la legislación del país, pues se presume que el contribuyente lo usufructúa y que genera una renta en favor de su poseedor, sin que sea asimilable a un ingreso laboral o de pensión propiamente dicho. Estamos frente a una nueva valoración jurídica perjudicial para la ancianidad del país, pues el solo hecho de gozar de un inmueble propio genera para los esposos o compañeros un impedimento de tal dimensión que lo extrae del concepto de personas de menores ingresos y lo traslada al de los pudientes de la sociedad colombiana.

Se requiere que el Congreso y el Gobierno hagan su propia valoración mediante una ley, para dar solución a esta problemática de la ancianidad y a la absoluta incapacidad en que se encuentra, para que no se considere como renta de trabajo el producto patrimonial de solo un inmueble.

SERGIO ALEJANDRO RUEDA,
abogado y contador público, Bucaramanga.
Texto resumido

El laudo arbitral y la sentencia...

►► PÁG. 14

Por ejemplo, en ella constará el pronunciamiento sobre la porción restante de los honorarios de los árbitros y el secretario, y la orden del informe sobre todos los gastos originados en el procedimiento arbitral que deberá rendir el presidente. Paralelo a ello, se torna en necesario que en el acta donde se consigne la audiencia para fallo, se registre el término corrido del tribunal arbitral, a efectos de cumplir con el mandato normativo que lo obliga para constatar que dicha emisión sea en tiempo y que el laudo no resulte extemporáneo.

Luego de la entrega a cada una de las partes de un ejemplar firmado del laudo,

dentro del término legal de cinco días, cualquiera de ellas podrá instar a su aclaración, corrección o complementación, y luego de agotada esta etapa, lo que hace de la eventual interposición del recurso de anulación. Y precisamente en virtud de la ejecutoria del laudo o, en su caso, de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición, se genera por antonomasia la cesación de funciones del tribunal arbitral, sin menoscabo de la limitada y restringida competencia para la sustentación y la oposición del recurso de anulación que eventualmente fuera promovido por alguna de las partes.

En todo caso, retornando las similitudes y diferencias

del devenir de los laudos y las sentencias, se anota que el primero únicamente puede ser objeto de un recurso extraordinario de extensión limitada, y ajeno al ámbito de acción de la segunda instancia, como lo es el recurso de anulación; mientras que el régimen jurídico del recurso de revisión frente a los laudos es el mismo que el contemplado para las sentencias.

En cuanto al cumplimiento de los laudos, se contempla también su ejecución forzosa, similar a lo que se establece para las sentencias. Aunque es importante precisar que el laudo es exigible aun cuando contra él se haya ejercitado la anulación, con la única excepción normativa que quien hubiere resultado condenada fuera una entidad pública y ella solicite su suspensión.

Inscripción de las situaciones...

►► PÁG. 14

lo siguiente: “... y si considera que otra persona es el controlante, [deberá] informar el nombre e identificación de dicha persona”. Luego, si no considera que alguien sea el controlante, no tendría que pronunciarse al respecto. En mi opinión, debería entenderse que, si la razón para rehusar la situación de control se fundamenta en una relación con otra persona natural, esa persona natural debería ser identificada, pues respecto de ella se dan los supuestos de inscripción de control. En cambio, si esa situación

deriva de una relación con una persona jurídica, en mi opinión no tendría que entrar en consideraciones al respecto e identificarla.

La razón para la anterior conclusión deriva del hecho de que, de acuerdo con el parágrafo segundo de la norma en comentario, cuando el accionista único es persona jurídica o cuando haya más de un accionista, no se suministra el formato y, por ende, no procede la inscripción de control. Esta diferencia de tratamiento entre la persona natural y la jurídica controlante tiene su

explicación en el hecho de que el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 obliga solo a sociedades a la inscripción del control, no así a personas naturales que lo ejercen, con lo cual, y gracias a la expedición del Decreto 667, se ata este cabo suelto que había dejado la Ley 222.

Por último, en relación con las SAS ya constituidas, la norma señala que ellas deben inscribir el control o el grupo empresarial en los términos del artículo 30 de la Ley 222, referencia que da pie para pensar que en estos casos las viejas SAS con una persona natural como único accionista no tendrán que hacer la inscripción a que se refiere el Decreto 667.

‘La llamada de la tribu’ (II)

►► PÁG. 14

los pensadores. Zorros fueron Shakespeare, Aristóteles, Montaigne, Molière, Goethe; erizos, Hegel, Dante, Platón, Proust. Un buen corolario de Berlin se resume en su frase “es aburrido leer a los aliados, a quienes coinciden con nuestros puntos de vista”.

Por último, Jean-François Revel es el último autor del libro de Vargas Llosa. Revel fue un gran crítico del comunismo a través de su libro *La tentación totalitaria*. Defensor de la social-democracia, criticando cómo la idea de democracia no era trabajada con mayor rigor. Siempre creyó que el fin de las

democracias se debía a que su existencia se entendiéda y sus defensores son timoratos. La paradoja de su defensa estaba en que justamente el pluralismo que se practica en ellas puede ser el germen de su fin. Aun así, debía correrse ese riesgo, para no caer en el totalitarismo.

En fin, es difícil resumir un libro lleno de ideas como el que nos propuso Vargas Llosa, pero, aun así, la propuesta esencial de su lectura es que en medio de un vacío intelectual y una hipermodernidad asfixiante, las ideas tienen que guiarnos para navegar. La apuesta es difícil, pero vale la pena.

Reformas en materia de contratos...

►► PÁG. 12

(ii) solicitar conjuntamente al juez que sea este quien proceda a la adaptación del contrato; (iii) si las partes, dentro de un plazo razonable, no se han puesto de acuerdo sobre ninguno de los dos mecanismos anteriores, el juez, a pedido de una de ellas, podrá revisar el contrato o poner fin al mismo, en la fecha y bajo las condiciones que determine.

Solo pretendo mostrar que hay una nueva fuente importante en la cual debemos beber los dedicados a estas materias.

1. Simler Ph., *Commentaire de la réforme du droit des contrats et des obligations*, Lexis Nexis, Paris, 2015, pág. 1.

2. Malaurie-Aynés, *Droit des obligations*, 9a. ed., L.G.D.J., Paris, 2017, n. 461.

3. S. Porchy-Simón, *Les obligations n. 524*, 10a. ed., Dalloz, Paris, 2018, n. 546.

4. Porchy-Simón, ob. cit., n. 524.

5. Simler Ph., ob. cit., Paris, 2016, pág. 45.


6. Porchy-Simón, ob. cit., n. 632.

7. Porchy-Simón, ob. cit., n. 525.

8. Malaurie-Aynés, ob. cit., n. 893.

9. Malaurie-Aynés, ob. cit., n. 894.

10. Malaurie-Aynés, ob. cit., n. 764.



¿Ya conoces nuestras NOVEDADES DE LITERATURA?


Selecciona las tuyas y **ANÓTATE UN GOL** con nuestra **SELECCIÓN DE CONOCIMIENTO**

TÍTULOS ESPECIALIZADOS EN:

- Derecho laboral y seguridad social
- Derecho administrativo
- Derecho público
- Derecho privado
- Comercio exterior
- Derecho tributario
- Contabilidad

Por compras superiores a **\$200.000** obtén **10% DE DESCUENTO***

Si realizas esta compra en **PUNTOS DE VENTA LEGIS** llévate un obsequio**



*Campaña válida del 14 de junio al 15 de julio de 2018. No acumulable con otras promociones. Válida para compras en puntos de venta Legis, Call Center, Tienda virtual: www.legis.com.co
**2000 unidades disponibles. Válido hasta agotar inventario. Solo por compras de literatura en puntos de venta LEGIS a nivel nacional.

Línea Legis Bogotá: 425 5200;
Línea Nacional: 01 8000 912101
sciente@legis.com.co
www.legis.com.co

LEGIS
INFORMACIÓN & SOLUCIONES